

ECUADOR

Cuarta Reunión de Expertos, 14 – 18 de julio de 2003

Brevemente, se mencionan las principales acciones que se han realizado en materia de Combate contra la corrupción en la República del Ecuador:

1. Decreto Ejecutivo No. 122.

Este Decreto, fue dictado por el Presidente de la República, ingeniero Lucio Gutiérrez Borbúa, atendiendo principalmente a los resultados del diálogo nacional convocado por el Gobierno al inicio de su gestión y contempla, fundamentalmente, los aspectos que siguen:

- a. Se declara el combate contra la corrupción *política de Estado*, atendiendo a la norma constitucional (Art. 3.6) que incluye dentro de los deberes primordiales del Estado el de garantizar una administración pública libre de corrupción. En ese contexto se inscriben los contenidos que se anotan inmediatamente.
- b. Se invita a las instituciones del Estado relacionadas con el combate y prevención de la corrupción para que voluntariamente construyan el *Sistema Anticorrupción del Ecuador* (SAE), mecanismo que supere las dificultades de integración funcional coordinada entre mencionados organismos y se involucre al sector público y a la sociedad civil en el diseño y ejecución de un Plan Nacional Anticorrupción y una agenda emergente en esa materia.

El proceso de conformación del sistema y el esbozo del contenido de la política de estado, ha tenido la coordinación de la Secretaría de Diálogo Social del Gobierno y ha contado con la valiosa y entusiasta contribución de los organismos públicos participantes así como de organizaciones de la sociedad civil.

Próximamente, los documentos consensuados, que describen la estructura, funcionamiento y programación básica del SAE, serán puestos en conocimiento de los titulares de las funciones del Estado y de los organismos de control autónomos, para la aprobación correspondiente, la que se concretará con la firma de un Convenio Constitutivo del Sistema.

- c. Se acoge como proyecto oficial del Estado ecuatoriano el denominado "CONTRATANET", iniciativa desplegada por la Comisión de Control Cívico de la Corrupción¹ (CCCC) desde 1999 y que se halla implementada en su primera fase, esto es, en la que permite la publicidad de la *información* acerca de procedimientos precontractuales del Estado. En la etapa siguiente se prevé instituir formas electrónicas transaccionales dentro de la contratación pública.

¹ La Comisión de Control Cívico de la Corrupción es un organismo de control con personalidad jurídica, instituido por los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República del Ecuador, normas que armónicamente con la Ley Orgánica de la Entidad, le atribuyen autonomía e independencia política, económica y administrativa, así como le otorgan competencia para promover, en representación de la ciudadanía, la eliminación de la corrupción, mediante la prevención e investigación de actos ilícitos. Los miembros de la CCCC son designados por colegios electorales conformados por organizaciones de la sociedad civil.

Adicionalmente, el Decreto 122 estableció la obligatoriedad de las dependencias de la Función Ejecutiva de adscribir al proyecto, lo que complementó la incorporación de los organismos autónomos municipales y provinciales, en virtud de convenios celebrados por ellos con la CCCC.

- d. Se fortalece la actividad de la CCCC, designándola *Autoridad Central* para los efectos de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) y estableciendo la obligación de las dependencias de la sociedad civil de ofrecer acceso electrónico a sus bases de datos por parte de la CCCC.

2. Avances legislativos.

- a. En mayo entró en vigencia la *Ley que regula las declaraciones patrimoniales juramentadas*, que desarrolla los textos constitucionales, aunque presenta deficiencias que serán anotadas en la actualización del informe de Ecuador hasta el 18 de agosto del año en curso.
- b. Se tramita en el Congreso Nacional la *Ley de Modernización del Tratamiento Jurídico de la Corrupción*, que engloba y perfecciona proyectos anteriores, pues aparte de incorporar los estándares mínimos de la CICC también considera la doctrina, el derecho comparado y la jurisprudencia nacional.
- c. También se tramita la Ley de Control Social del Poder Público, que engloba y perfecciona proyectos anteriores, en particular los relacionados con el derecho de acceso a información. El mencionado proyecto desarrolla el derecho constitucional de control social, sus derechos conexos y las garantías procesales correspondientes.

Este proyecto, como el anterior, fueron preparados por la CCCC, acogidos por sectores legislativos y su discusión será promovida no solamente al interior del Congreso Nacional sino también en la sociedad civil.

3. Otras acciones

- a. El Procurador General del Estado creó un sistema para el seguimiento de juicios en que participa el Estado, ya sea como acusador o como demandado, para incrementar la tasa de éxito judicial. En este contexto, especialmente, se busca efectivizar el derecho de repetición a favor del Estado.
- b. Atendiendo una invitación de la Oficina Anticorrupción del Perú, la CCCC asistió a una reunión subregional en Lima, en donde adquirió el compromiso de organizar el siguiente encuentro, el que se realizará en Quito en septiembre próximo. Esta será una ocasión propicia para intensificar la cooperación internacional en materia de combate a la corrupción.
- c. Muchos Municipios del país han iniciado, por propia iniciativa, la formulación y ejecución de programas institucionales dirigidos a fomentar la transparencia de su gestión, así como a incentivar la participación ciudadana en la vigilancia y control de sus actividades. Estas medidas amplían la cobertura y descentralizan el combate contra la corrupción.
- d. En el ámbito académico, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la CCCC y otros centros de educación superior están promoviendo la creación de un

Curso de Postgrado en Estudios sobre Corrupción y su Combate, para estimular la reflexión sobre el fenómeno y formar “operadores anticorrupción”.

Alf Lozada Prado.
Experto Titular, ECUADOR